

Artículos

La transición: los proyectos en disputa

Joaquín Arriola y David Mena*

Resumen

El propósito de este artículo es caracterizar la transición que vive El Salvador, a partir de la identificación de los principales desafíos que esperan a la sociedad salvadoreña. De algún modo, este artículo prolonga y profundiza otro previo de los autores¹, pero le cambia el sentido de la perspectiva: si allí analizábamos la coyuntura a la luz de la historia, en este pretendemos identificar el momento histórico a partir de las sucesivas coyunturas que han marcado nuestro pasado colectivo.

No es un secreto para nadie que el país está viviendo una situación de transición política. Lo que no está claro es qué tipo de transición, cuál es el contenido real de la democracia que se está construyendo, y si se van a producir las transformaciones económicas necesarias para consolidar un sistema político participativo.

En la presente transición política, se ha generado un cierto acuerdo (que no consenso) para canalizar las diferencias entre representantes de intereses contradictorios, a través de los mecanismos y las formas de la democracia liberal: separación de poderes, elección popular del poder legislativo, libertad de expresión; en definitiva, acuerdo del funcionamiento, por primera vez en nuestra historia, de un Estado de derecho.

Algunos intelectuales, desde la derecha, (Da-

vid Escobar Galindo a la cabeza), consideran que este es el mecanismo para disolver el carácter polarizante de la forma en que se han enfrentado las naturales diferencias de interés y de opinión en El Salvador a lo largo de su historia.

Sin embargo, el período de transición no asegura que se vaya a lograr un Estado de derecho: si no se cumplen a cabalidad los acuerdos de paz; si la Fuerza Armada se resiste a cumplir el mandato constitucional (que levantaría de nuevo el espectro de la dictadura militar); si Estados Unidos mantiene su acción política a partir de un análisis ideologizado de lo que acontece en el país y en la región (que mantendría la inestabilidad por no reconocer el derecho de participación de los sectores tradicionalmente excluidos de las decisiones políticas); si los países vecinos no consolidan a su vez

* Agradecemos a Mario Lungo sus comentarios a un borrador previo de este texto, los cuales nos permitieron mejorar sustancialmente la versión final.

verdaderos procesos democráticos (no se avanzará en la integración regional); en fin, si no se articula la participación de todos los actores sociales, no arribaremos a la democracia, sino a un autoritarismo de civiles.

Para descubrir dónde se encuentra el nudo no disuelto de la transición quizá sea conveniente refrescar la memoria histórica.

1. Un poco de historia²

En la historia del país, la resolución de las contradicciones de intereses se hizo tradicionalmente por la vía del golpe de Estado: 1972, 1961, 1960, 1948... son fechas emblemáticas a este respecto³.

En 1931, la oligarquía, enfrentada a una fuerte crisis cafetalera, tenía problemas para resolver el problema básico de su acumulación. Esta situación abrió un espacio para que se conformase un gobierno pro-industrialista, es decir, favorable al desarrollo del *mercado nacional*. Fue el mecanismo que los industriales encontraron para superar una crisis interna que derivaba ciertamente de una coyuntura internacional, de una crisis mundial.

Para el gobierno de Araujo significaba tocar el problema de la tenencia y propiedad de la tierra, con el claro objetivo de dar capacidad de compra a los campesinos y elevar el nivel de la demanda nacional. El experimento, que duró nueve meses, fue interrumpido por la acción política comandada por la oligarquía, que ideologizó el problema, agitando el espantajo del comunismo, y expulsó a Araujo del poder mediante la promoción de un golpe de Estado.

Sin embargo, la propia oligarquía planteó su salida a la crisis de acumulación a partir de tres elementos: (a) la "Ley moratoria", con la cual evitó la pérdida de las propiedades hipotecadas de los cafetaleros; (b) la reordenación bancaria: creación del Banco Central y el Banco Hipotecario, unificar la moneda, tener un tipo de cambio único y abrir líneas de crédito para capear la crisis de los precios internacionales del café; (c) desde el Estado, asegurar la ganancia del café, creando la Compañía Salvadoreña del Café, cuyo objetivo esencial fue sostener los precios por encima de un mínimo que garantizara la generación de un excedente su-

ficiente. Con estas medidas se sometió al Estado a las necesidades de garantizar la acumulación de excedentes de la oligarquía agraria, y se le impuso dicha solución a los industrializantes que estaban por el fomento del mercado nacional y no por la lógica de la acumulación tradicional de aquélla.

En abril y mayo de 1944, la misma alianza que había dado el triunfo electoral a Araujo, trece años atrás, apoyó la expulsión del general Martínez del gobierno. Pero en octubre del mismo año, se produjo, mediante un nuevo golpe de Estado, la restauración oligárquica. Y durante cuatro años, el país vivió una profunda inestabilidad política hasta que en diciembre de 1948 tuvo éxito un nuevo golpe de Estado proindustrializante, cuyos impulsores se encargarán de profundizar la modernización del Estado.

La oligarquía ya había modernizado el Estado en su dimensión monetaria y financiera. Los nuevos sectores de poder lo hicieron en su dimensión infraestructural: en este período se inició el desarrollo de puertos y carreteras, la producción de energía eléctrica, la modernización productiva por la vía del mantenimiento de una mano de obra saludable (seguro social), la creación de algunas empresas estatales autónomas... toda la institucionalidad estatal se puso al servicio de esta modernización económica. Se produce así un fortalecimiento de los industriales por la vía de la intervención del Estado, creando infraestructura e incentivos (la acumulación de capital se hizo contando con la participación de éste).

Los cafetaleros, en la medida en que se resolvió la crisis económica mundial, renovaron su capacidad de acumulación, y la ampliaron, aprovechando los espacios económicos abiertos por el Estado. Se produjo así una imbricación entre grupos económicos (los grandes productores, los beneficiadores y los exportadores de café se volvieron inversionistas industriales: los Borgonovo (*Acero S. A.*), los De Sola (se asocian a la multinacional *Unilever*), los Palomo (*ADOC S. A.*), los Regalado-Dueñas (la mayor fábrica de cemento del país), etc. (ver Cuadro 1)⁴. El modelo puede funcionar por más de una década porque grupos familiares económicamente poderosos, miembros de la vieja oligarquía, se montaron en el carro de

Si no se articula la participación de todos los actores sociales no arribaremos a la democracia, sino a un autoritarismo de civiles.

la industrialización. Y conservaron su hegemonía sobre los denominados grupos industrializantes porque en el proceso, concentraron y controlaron las finanzas, la banca, el comercio de importación y exportación, la industria y las relaciones con las empresas multinacionales.

Cuadro 1
Algunos empresarios de origen cafetalero con establecimientos diversos en 1949

Miguel Dueñas	Venta y reparación de carros
Miguel Palomo	Fábrica de ladrillos
Battle hermanos	Fabrica gaseosas <i>La Cascada</i> , almacén agrícola
Quiñónez Sol y Cía.	<i>Cremería Delta</i>
Guillermo Meléndez R.	Destilería, venta de madera, <i>Transporte Meléndez Bus</i> , almacén agrícola industrial
Félix Cristiani y Cía.	<i>Droguería Santa Lucía</i>
Daglio y Cía.	Taller de reparación y garage, ferretería, fotografía, venta de telas
J. Meléndez e Hijos Cía.	Empresa de electricidad
H. de Sola e Hijos	Importación-exportación, fábrica de jabón y velas, hospital
Archie Baldocchi	Venta de pinturas
Llach y March	Importación de maquinaria
Benjamín Sol Millet	Importación de maquinaria agrícola
Joaquín Palomo h.	Venta de madera
Vilanova K. hermanos	Agencia agrícola industrial
Raúl y Alfonso Salaverría	Destilería de alcohol
Borgonovo	Fábrica de sacos de henequén

Fuente: David Mena, *Los cafetaleros y la industrialización salvadoreña*, Escuela Centroamericana de Sociología (tesis de grado), San José, 1979.

En 1960 se manifiesta el intento de los industrializantes por sacudirse el yugo que habían puesto los cafetaleros en el proceso de acumulación. El intento solo duró tres meses; tras el golpe de octubre, en enero del 1961 entró de nuevo la restauración oligárquica. Aunque ahora otros acontecimientos cuestionaron su hegemonía tradicional.

En efecto, en esta ocasión aparece con fuerza un nuevo actor interno, aunque venga de afuera. El nuevo ciclo de dominio oligárquico sobre el aparato de Estado coincide con la *Alianza para el progreso*, la iniciativa del gobierno de Kennedy dirigida a contrarrestar el creciente influjo de la revolución cubana en toda América Latina. Por tanto, bajo el discurso anticomunista (legitimado esta vez por la potencia internacional hegemónica) se enmascaraba el verdadero conflicto de intereses del período.

La presencia del gobierno de Estados Unidos ya era un hecho en la vida política desde 1948, al menos en un plano tecnocrático. Las principales medidas de modernización del aparato del Estado (creación del IVU, Mejoramiento Social, Instituto de Colonización Rural, etc.)⁵ fueron elaboradas por asesores norteamericanos. Lo nuevo en 1961 es que este actor internacional se constituyó en agente portador de propuestas en términos ideológicos y políticos. La *Alianza para el progreso* matiza así el carácter del gobierno surgido del golpe de 1961, pues su puesta en práctica significaba, en el caso de El Salvador, *modernizar el Estado*, para brindar a los sectores populares mecanismos de protección social (desde el gobierno de Rivera existía un discurso de mejora de las condiciones de vida de campesinos y obreros: decreto de salarios mínimos en el campo).

La oligarquía, que había impulsado al nuevo gobierno en la perspectiva de preservar el orden establecido, se puso totalmente en contra de la *Alianza para el progreso*, y por primera vez se produjo una disputa por el control de la Fuerza Armada entre aquélla y Estados Unidos.

El proyecto del mercado común centroamericano es otra dimensión fundamental del proceso. Desde los primeros años de la década de los cincuenta se efectuaban convenios comerciales, sobre todo entre Guatemala, Honduras y El Salvador, impulsados por este último país. El proyecto modernizante de la década había dado un impulso a la manufactura tanto en El Salvador como en Guatemala y Costa Rica —solo quedaban al margen de este proceso, Nicaragua bajo la dictadura de Somoza y Honduras, con su histórico carácter de protectorado bananero. La red de convenios comerciales apuntaba a asegurarse mercados compradores en el área centroamericana.

Los sectores industrializantes habían mostrado no tener capacidad política para hacer la reforma agraria que encontrase en la demanda interna el mercado consumidor; de ahí la búsqueda de un mercado “doméstico” en el área centroamericana.

Los beneficios que se derivan de la ley de incentivos fiscales y la protección al mercado común son mecanismos utilizados para fomentar la actividad industrial.

La década de los sesenta está, pues condicionada por la presencia más intensa de Estados Unidos en el ámbito político. Pero también está matizada por la penetración de empresas transnacionales, que en dicha década adopta la forma de coinversiones con capitalistas locales sobre todo cafetaleros. (Ver cuadros 2 a 5). También aparecen inversiones de capital extranjero, las cuales generan oposición con las inversiones nacionales, porque aquéllas se consideraban como una “intromisión” en el espacio acotado por la oligarquía para realizar su centralización y concentración de capital. Así, por ejemplo, la posible apertura de una filial del *First National City Bank* generó enormes reacciones: los banqueros hablaban de “los tiburones financieros internacionales” que venían a comerse el mercado financiero nacional. De este modo se decretó la ley que impidió a la banca extranjera captar ahorro nacional. Sólo se permitía la inversión extranjera total, en áreas de alta tecnología (por ejemplo, *Phelps Dodge de Centroamérica*) o en actividades en las cuales el sector hegemónico del capital nacional no tuviese un interés manifiesto.

Cuadro 2
Inversión y reinversión directa por país de origen
(En dólares)

	1961-1969	1970-1979	1980-1990	Total
Estados Unidos	19,706,421	46,394,698	25,814,653	91,915,772
Panamá	7,381,927	16,547,071	3,941,130	27,870,128
Japón	2,684,256	9,142,624	770,318	18,292,540
Holanda	410,131	2,592,553	10,744,265	13,746,949
Canadá	775,640	2,347,156	9,482,622	12,605,418
G.Bretaña	3,550,600	2,473,803	4,541,490	10,565,893
I.Virgenes	--	--	8,703,600	8,703,600
Alemania	195,225	4,602,095	125,000	4,922,320
Otros	5,048,961	2,112,601	3,416,988	2,348,647
Total	39,343,030	105,225,980	67,540,061	212,109,066

Fuente: Joaquín Arriola, “Los procesos de trabajo en la Zona Franca de San Bartolo”, IIES-UCA, 1993 .

Cuadro 3
Inversión y reinversión extranjera directa por rama de actividad
1960-1990 (en dólares)

	1961-1969	1970-1979	1980-1990	Total
Producción agropecuaria	48,689	490,131	134,888	673,708
Pesca	56,400	594,900	101,546	752,846
Alimentarias	966,105	2,637,772	3,094,557	6,698,434
Tabaco	3,579,600	963,453	3,371,425	7,914,478
Textiles y afines	3,614,216	21,747,501	861,961	26,223,678
Químicas	7,557,656	3,252,148	10,983,264	21,793,068
Petróleo	3,921,548	1,639,560	4,489,200	10,050,308
Medicamentos	375,090	1,951,260	4,029,931	6,356,281
Productos metálicos	771,750	5,069,771	0	5,841,521
Productos no metálicos	329,296	94,747	409,286	833,329
Material eléctrico	1,165,858	6,760,169	2,803,196	10,729,223
Papel y artes gráficas	1,117,110	4,728,388	1,670,182	7,515,680
Ferretería	273,190	562,400	343,664	1,179,254
Maquinaria y equipo	864,828	4,193,141	2,554,529	7,612,498
Óptico y de medida	134,880	592,480	0	727,360
Otras manufacturas	49,301		34,804	84,105
Construcción	196,373	557,116	3,672	757,161
Hostelería	606,290	770,520	27,121	1,403,931
Comercio	7,693,851	18,375,184	18,315,602	44,384,637
Otros servicios	6,020,999	30,245,334	13,466,860	49,733,193
Total	39,343,030	105,225,975	6,6695,688	211,264,693

Fuente: Joaquín Arriola, "Los procesos de trabajo en la Zona Franca de San Bartolo", IIES-UCA, 1993 .

Cuadro 4

Compañías industriales extranjeras asociadas a grupos familiares cafetaleros (1974)

	% de participación extranjera
* Canadá	
Bayer Foreign Investment Ltda.	47
Limited Metrinvest	50
* Japón	
Shory Co. Ltda.	17.5
Hiteng Co. Ltda.	10
Mitsui and Co.	10
Thorai Industries Inc.	12
Industrias Unidas S.A.	77
* Suiza	
Pave O. Cor. A.G.	50
* Alemania	
Siemens A.G.	25
* Inglaterra	
British American Tobacco Co. Ltda.	76
Esso Standard Oil Ltda.	62
Shell Overseas Trading Ltda.	33
* Holanda	
Unilever N.V.	50
* Estados Unidos	
Cargill Inc	70
John Mandville Corp. Inc.	10
Japan Cotton Co.	39
Aluminium Co. of America	90
Bemis Co. Inc.	50
Crawn Selerback International Inc.	23
Foremost McKesson Insurance	54
Foods Fires Stores Inc.	14
Invec Foods Insurance	50
International Harvester Co.	66.6
Inmuno Science Corporation	50
Intercontinental Shoe Corporation	2.5
Phelps Dodge Corporation	57
Spilbury Holding Canada Ltd.	9
The Wuster Brusck Co.	21
True Temper Corporation	0.6
Vender and Co.	87
Xerox Corporation	84
Dow Chemical N.V.	99
* Panamá	
Corneta S.A.	..
Centralac Investment Inc.	22
Corporación Financiera Centroamericana SA	49
Fertica S.A.	95
Soparcol Insurance Co.	20
Ray-O-Vac International Corporation	99.6

Fuente: David Mena, *Los cafetaleros y la industrialización salvadoreña*, Escuela Centroamericana de Sociología (tesis de grado), San José, 1979.

Cuadro 5

Compañías industriales extranjeras asociadas a grupos familiares no cafetaleros (1974)

	% de participación extranjera
* Estados Unidos	
Kimberly Clark Corp.	37.6
King Treaming Inc	50
Sheler Glober Intern. Corp.	20
The Tappan Co.	80
* Panamá	
Gentol S.A.	45
* Puerto Rico	
Puerto Rico Franchising Corp.	50
* Costa Rica	
American Ice Cream Co. Inc.	33
* Japón	
Yoshida Kogio KK	50
* Holanda	
Sohuter Electronic Holding N.V.	72
Asociados a otros empresarios	
* Japón	
Matushita Electric S.A.	10
* Inglaterra	
Glaxo Group Ltd.	75

Fuente: David Mena, *Los cafetaleros y la industrialización salvadoreña*, Escuela Centroamericana de Sociología (tesis de grado), San José, 1979.

La pelea por el control del Estado no es evidente para el público, pues se da entre los gremios empresariales. Esta guerra oculta es la verdadera lucha de la época: lo que está en juego es el reparto del excedente económico, por la vía del control del crédito, del manejo de la política fiscal en favor de los intereses de unos u otros, por la vía de la asociación o no con los capitalistas extranjeros...

En julio de 1969 se rompió esta conducción del Estado, que lo concebía como botín a repartirse entre los grupos capitalistas de distinto signo. La ruptura fue consecuencia de la reacción hondureña al papel subordinado que le obligaba a asumir

el mercado común centroamericano. El desarrollo desigual de estas economías provocó que la salvadoreña extrajera excedentes de su contraparte hondureña. Este es un elemento explicativo del conflicto militar entre ambas naciones⁶.

Otro factor que explica el conflicto bélico es que el gobierno salvadoreño provocó la guerra para detener el retorno de los salvadoreños. En ambos países existían movimientos reivindicativos sobre la tierra y los salarios. En Honduras, por presiones campesinas, el gobierno inició un proceso de reforma agraria. Repartió tierras estatales ocupadas por campesinos de origen salvadoreño (que desde 1932 habían llegado a Honduras por la represión sistemática del gobierno salvadoreño y por la dificultad de acceder a la tierra en su país), provocando la persecución de los mismos. En un masivo éxodo, millares de salvadoreños huyeron hacia El Salvador. Los militares salvadoreños, con la anuencia de los terratenientes, desataron la guerra para frenar dicha afluencia y evitar mayor presión sobre la tierra, la cual profundizaría la inestabilidad social en el agro salvadoreño. Igual que ahora, respecto de los salvadoreños en Estados Unidos, la política permanente de algunos grupos de poder es evitar su retorno, por lo que implicaría en términos de la necesidad de profundizar los cambios estructurales requeridos para su inserción productiva en el país.

La crisis del proceso de integración y del Estado modernizador de la infraestructura puso en primera fila otra contradicción latente en todo el período: el problema de la tierra, pero que a diferencia del anterior, no se manifiesta en la disputa por el Estado, sino *contra* éste, por su carácter profundamente clasista.

La pérdida del mercado doméstico centroamericano planteó, de nuevo, la urgencia de desarrollar el mercado nacional, y por lo tanto, la disputa por el Estado. En 1972, la UNO, la principal fuerza política del país, que agrupaba desde la democracia cristiana, pasando por la social democracia hasta el partido comunista, adoptó un programa



que reproducía los elementos esenciales del proyecto industrializante. Aunque no se hace mención explícita a la necesidad de la reforma agraria (planteada inicialmente en 1967 por el Partido Acción Renovadora, cuyo candidato presidencial fue el Dr. Fabio Castillo), ningún sector de la burguesía productiva apoyó explícitamente dicha coalición electoral. El proyecto industrializante, impulsado desde esa plataforma política —sin apoyos concretos en el capital— suponía abrir el mercado interno a la industria, facilitando la organización de los trabajadores, especialmente en el campo, incrementando sus ingresos reales. La redistribución del ingreso planteada desató la oposición de la oligarquía y provocó el fraude electoral, como necesidad para mantener el control sobre el aparato de Estado.

La década de los setenta se inició con un panorama político nucleado en torno a la contradicción de intereses entre la oligarquía y el proyecto reformista. La incapacidad de los industriales para articular un proyecto político partidario propio facilitó que fuesen por un lado Estados Unidos y por otro la UNO, la expresión del proyecto modernizante. La ideología anticomunista de los gobiernos estadounidenses, que obnubiló su perspectiva de largo plazo, no dio espacio a los políticos criollos modernizantes. A su vez, dentro de la Fuerza Armada se manifestaron divisiones entre los jefes

militares más vinculados a los intereses de la oligarquía y los orientados a los intereses de Estados Unidos y, en esa medida, más modernizantes⁷.

El apoyo mayoritario de la sociedad civil en favor del proyecto industrializador y modernizador es otra característica definitoria de la década. En este contexto, el cierre de la vía política formal para establecer la sucesión de los gobiernos generó las condiciones objetivas para el surgimiento y desarrollo de la insurgencia armada. La falta de una política clara del imperio, matizada siempre por su perspectiva ideológica, que admitía ese tipo de fraudes, contribuyó a polarizar la situación.

En 1972, el gobierno de Molina, apoyado por Estados Unidos, se planteó la *transformación agraria* como vía para dar una salida viable al proceso de acumulación capitalista en el país y para legitimarse ante la oposición. Ya existían antecedentes o perspectivas de acción en torno al problema de la tierra: la Unión Comunal Salvadoreña había sido creada en 1968, bajo la égida de los norteamericanos; en 1970 se celebró el Primer Congreso Nacional de Reforma Agraria; la "Ley de Avenamiento y Riego" de la misma fecha pretendía hacer un uso más eficiente de la tierra: surgieron los primeros regadíos, y con ello, la necesidad de medir las tierras y las propiedades.

La oligarquía se opuso frontalmente a todo el proceso: creó los grupos FARO (Frente Amplio de la Región Oriental y Frente Amplio de la Región Occidental, germen de los escuadrones de la muerte y del partido ARENA) y frenó el intento reformista. Para asegurar su posición gubernamental, su hegemonía y su control sobre el Estado, en 1977, la oligarquía lanzó como candidato presidencial al general Romero —calificado de duro y antireformista—, cerrando así las salidas a la crisis de acumulación del capital industrial.

El Foro Popular sirvió para aglutinar a la oposición (la antigua UNO) e incluyó a diversas organizaciones populares simpatizantes y militantes de la izquierda. Los industriales salieron de la escena política. La ideología anticomunista norteamericana profesada por la AID, sirvió para opacar a los sectores industrializantes (que asumieron dicha ideología y no se diferenciaron de la oligarquía)

como actor político con expresión propia frente a esta última. A esto contribuyó, sin duda, la penetración de la oligarquía en el sector industrial, hasta el punto de impedirle la formulación de una propuesta gremial y política coherente.

Por eso, el golpe de 1979 no tuvo el mismo carácter que los anteriores. Ya no se trataba de dirimir las contradicciones entre las dos tendencias del capital, sino de detener el surgimiento de un proyecto alternativo y nuevo, desde lo popular *hacia* lo industrial modernizador. Por ello, los golpistas triunfantes recogieron el discurso progresista que databa de 1931 y que se ha manifestado en todas las fases de la historia nacional. Por ese discurso obtuvieron el apoyo del Foro Popular (la vieja UNO —PDC, MNR, UDN—, la UCA, la Universidad de El Salvador, AGEUS, Mons. Romero y los frentes de masas vinculados a los partidos de la izquierda).

Como el golpe de 1979 no había sido orquestado por los grupos dominantes, tanto la oligarquía como Estados Unidos jugaron a controlar el proceso, en una coincidencia táctica de intereses. Desde 1980, con la alianza Estados Unidos-Partido Demócrata Cristiano-Fuerza Armada, los norteamericanos controlaron el proceso. En 1981, Estados Unidos definió su política contrainsurgente con claridad. Cuando la oligarquía, con la creación de ARENA, buscó recuperar el control del aparato del Estado y de la cúpula militar para desestabilizar al gobierno *de facto*. Unido a esto estaba la fuerza de los grupos que apostaron todo al proceso revolucionario insurgente (FPL, ERP). Así se comprende que la experiencia durase poco tiempo⁸.

No obstante Estados Unidos y la oligarquía definieron un enemigo común: los opositores armados; y se plantearon como objetivo prioritario acabar con la insurgencia. Pero para la segunda, también los grupos de la oposición no armados eran "el enemigo", mientras que para Estados Unidos eran una pieza clave en su estrategia contrainsurgente.

Mientras los norteamericanos apoyaron las formas contrainsurgentes, la oligarquía no tuvo nada que ofrecer. No fue sino hasta la

oficialización del discurso neoliberal como discurso del poder de Reagan, con su profundo contenido de clase⁹, que la oligarquía encontró un discurso más articulado con el del gobierno estadounidense.

La alianza FMLN-FDR (Frente Democrático Revolucionario) sí tenía un proyecto detrás. Pero la alianza Partido Demócrata Cristiano-Estados Unidos-sectores de la Fuerza Armada carecía de un proyecto consistente, pues éste fue impuesto a los sectores dominantes. No era un proyecto compartido por una base social capaz de sostener un gobierno legítimo. Por esta razón, ARENA logró en poco tiempo neutralizar el contenido transformador del proyecto contrainsurgente. Al final, éste se redujo al aspecto político-militar y en lo económico se remozó el viejo proyecto oligárquico.

Los acuerdos de paz reflejan esta realidad desde el lado de la hegemonía oligárquica. Ello explica cómo en materia económica no se logró modificar la contrarreforma: la *reprivatización de la banca*, del comercio exterior y de los activos estatales, se ha hecho en beneficio de los sectores tradicionalmente dominantes. La reforma agraria no la lograron revertir, por la existencia de una base social importante que se benefició de la misma y la defiende a capa y espada y porque los límites que ARENA logró imponer a la reforma agraria en 1983 (límite constitucional de las 245 has.) le preserva la base de acumulación agrícola. El FMLN aceptó obtener acceso a la tierra para su base social más importante, en el entendido de que ésto no va a afectar las propiedades de los terratenientes.

Los acuerdos de paz tienen tres componentes esenciales: la desmilitarización, la institucionalización de un Estado de derecho y la transferencia de tierra. Este último objetivo ha sido en la práctica el que con más insistencia y minuciosidad ha sido perseguido por el FMLN. La razón es doble: terminar la guerra sin una victoria, obligaba a compensar a quienes han mantenido las armas durante más de diez años. El énfasis en la transferen-

cia de la tierra a los ex combatientes refleja la base campesina del FMLN, pero éste no ha planteado una reforma agraria.

Sobre una superficie agrícola total de 1,452,000 has. de tierra, la reforma agraria contrainsurgente había distribuido 334,895 has., provenientes de las grandes propiedades de más de 500 has. Por lo tanto, aunque su impacto fue limitado, significó una cierta redistribución, desde los grandes propietarios hacia los campesinos pobres. Sin embargo, en el inventario de tierra negociado a raíz de los acuerdos de paz, el FMLN listó 263,082 has. El 82 por ciento de las propiedades eran de menos de 70 has. y de las tierras estatales reclamadas (el 16.3 por ciento de la superficie), una parte sustancial estaba previamente asignada a cooperativas de la reforma agraria o son propiedades embargadas por los bancos.

Por lo tanto, podemos concluir que el problema de la tierra sigue sin estar definitivamente solucionado en El Salvador, por cuanto el peso de la gran propiedad sigue siendo determinante en la definición de las estructuras sociales y económicas del agro, y a futuro, se presenta como un problema de gobernabilidad, como ya lo fuera en coyunturas anteriores.

2. Los proyectos en disputa

Hoy la sociedad salvadoreña es mucho más compleja que hace tres quinquenios: ya no son sólo los proyectos industrializante y oligárquico los que están en juego; ahora hay un proyecto nacional popular que compite y se relaciona con los otros dos. Estados Unidos carece de un proyecto global similar a lo que representó la Alianza para el Progreso; no obstante, está sobredeterminando los tres proyectos en juego y tiene poder de veto sobre cualquiera de ellos.

2.1. El modelo oligárquico: una economía sin mercado

Como ya hemos señalado, una diferencia fundamental entre el proyecto oligárquico y los otros

El problema de la tierra sigue sin estar definitivamente solucionado en El Salvador...

dos es que el primero no tiene interés en el mercado nacional, porque el aumento de la capacidad de consumo de los sectores populares implica necesariamente un aumento de la participación de los asalariados en la riqueza nacional; incluso, podría significar una participación de los mismos en el diseño del Estado y, en definitiva, en el poder.

La cuestión salarial es así una de las claves de la contradicción entre el modelo oligárquico y el industrializante. Para aquél, el salario es tan solo un coste, que tiene que mantenerse por debajo del valor de reproducción de la fuerza de trabajo, para asegurar un excedente en una producción como el café que se encuentra en una crisis mundial sin precedentes. Por el contrario, el modelo industrializante requiere una dinámica de incremento de salarios y productividades para aumentar la dimensión del mercado y la posibilidad de vender la producción (pensemos que el mercado de la industria nacional es el mercado local y el centroamericano).

La supuesta solución que se ha encontrado desde el modelo oligárquico es la de una industria sin salarios y sin productividad, una industrialización sin fordismo: *la maquila*. Sin embargo, no hay que confundir industrialización con implantación de fábricas maquiladoras, que en realidad no forman parte de la economía nacional, sino de la producción internacional para el mercado mundial¹⁰. La maquila no dinamiza la economía (el consumo, los servicios, la industria y la agricultura); tan solo representa un aporte en empleos de bajos salarios y de rentas por alquiler de servicios (maquinaria, suelo, energía eléctrica, agua, comunicaciones).

La capacidad de producción campesina a bajo coste permite solventar temporalmente la situación, pues mantener los salarios urbanos bajos se hace compatible con una cierta capacidad de consumo, por el bajo coste de la reproducción de la fuerza de trabajo urbana. Sin embargo, la expansión de la industria nacional requiere, a medio y largo plazo, un aumento de los salarios, por la incapacidad de ampliar los mercados fuera del ámbito regional.

El Estado es otro eje de las contradicciones.

Como la satisfacción de la demanda interna no es parte esencial del proyecto productivo de la oligarquía, ésta no requiere de un Estado legitimador del orden social. La función represiva es, por lo tanto, la principal tarea asignada al Estado, que no es de consenso, sino un aparato subordinado a la clase dominante (de ahí las presiones y la aceptación de Cristiani por rescatar para la Fuerza Armada las funciones de vigilancia y control social —patrullas en los cafetales, control de la criminalidad y el tráfico..., o las fuertes resistencias del partido ARENA para llevar a cabo la reforma judicial. La concepción de lo "social" bajo este modelo se reduce a la "caridad de Estado", pues de hecho, la pobreza masiva es funcional al modelo: la creciente informalidad urbana contribuye al mantenimiento de los bajos niveles salariales y lo mismo la pobreza masiva.

El enorme aumento de la población no puede ser absorbido por una economía poco dinámica, de bajo nivel de crecimiento de la productividad, acumulando así una creciente conflictividad social. La solución que se encuentra al problema demográfico y social en este modelo es la represiva. Recordemos que había grupos oligárquicos que pedían 300,000 muertos en la guerra. Por otro lado, la emigración de la población se ha convertido no solamente en la válvula de escape de la presión demográfica, sino que, por la vía de las remesas, en el principal sostén de la economía.

El tratamiento otorgado actualmente por la clase dominante a esta entrada autónoma de divisas, que prácticamente duplica el fondo nacional de salarios, refuerza el carácter rentista y especulador de la economía: mediante el control del sistema financiero, la oligarquía recicla estos dólares alimentando las actividades comerciales —crecientemente centralizadas— y los canaliza hacia actividades inmobiliarias y de especulación con el suelo.

2.2. La industrialización y la necesidad del Estado

Los industrializantes, por su incapacidad para cambiar la correlación de fuerzas con la oligarquía, también requieren de un Estado represivo. Pero también requieren de un Estado que subsidie

el coste de la fuerza de trabajo, pues en su caso, ésta no se puede pagar por debajo de su coste de reproducción, porque su capacidad de consumo de productos manufacturados no puede caer por debajo de un mínimo sin poner en peligro la propia reproducción del capital. Por eso se requiere un cierto nivel de legitimación estatal, por medio del aporte de un salario indirecto (seguro social, pensiones...).

También se requiere que el Estado cumpla un papel de mercado cautivo, contribuyendo sustancialmente a sostener la demanda interna por la vía del gasto público. Este rasgo del modelo industrializante salvadoreño es especialmente importante por las características estructurales de las prácticas empresariales en la industria salvadoreña, que se resumen en tres:

1. Necesitó condiciones de "invernadero". Requirió del apoyo estatal para conseguir beneficios e incentivos: eliminación de los impuestos, asistencia financiera, creación de infraestructura, mercado gubernamental y otros¹¹.
2. Utilización de tecnología ahorradora de mano de obra. A consecuencia de ello, los industriales no han creado suficientes puestos de trabajo para una población laboral creciente. Ha sido el Estado el generador de empleos (la mayoría improductivos, pero contribuyen al consumo interno).
3. Incapacidad para ampliar su mercado interno. La debilidad política de los industriales no les permitió impulsar reformas en la tenencia de la tierra; para suplir su necesidad de compradores, decidieron unir los pequeños mercados de la región. Esto explica la creación del mercado común centroamericano.

Por fin, el modelo industrializante requiere un Estado que fomente y facilite la acumulación privada del capital, por la vía de la socialización de los costes de las infraestructuras, la calificación de la fuerza de trabajo y la subvención del crédito. En este ámbito se produce también una disputa con los intereses oligárquicos: el apoyo tradicional de la recaudación fiscal ha provenido del impuesto a las ventas de café al exterior. Esta situación otorgaba a los cafetaleros una posición privilegiada en

el Estado para legitimar su hegemonía. Actualmente, cuando la recaudación fiscal descansa en los impuestos al consumo (IVA), los industriales no pueden reivindicar un acceso parecido a las decisiones del Estado (éste carece de una política industrial y las medidas de apertura comercial no han respetado los ritmos de maduración y reconversión de la industria nacional).

2.3. Las propuestas de la izquierda: entre la modernización y la economía popular

La izquierda salvadoreña no sólo ha cambiado de métodos de lucha, sino de objetivos y estrategia. El FMLN está dando un viraje sustancial respecto a las prácticas tradicionales de la izquierda. El FMLN ha reconocido, mucho antes que otras izquierdas latinoamericanas, que la nueva era del continente ha vuelto obsoletas no solo las estrategias de desarrollo tradicional (la agroexportación, la industrialización sustitutiva de importaciones), o las formas tradicionales de Estado (el populismo, el corporativismo, las dictaduras militares), sino también las estrategias reivindicativas propias de la izquierda. Ya no se trataría de plantear un conjunto de exigencias al Estado y al capital, sino de hacer frente a la debilidad de las estructuras productivas desde una alternativa que parta de la propia producción.

El FMLN parece aspirar a resolver el problema del cambio estructural y de la pobreza comenzando por el establecimiento de un espacio productivo controlado por la izquierda —el 18 por ciento de las tierras del inventario del FMLN constituye el capital productivo con el que el FMLN cuenta inicialmente para aplicar su proyecto— y el control del Estado se concibe en primera instancia como un requisito para viabilizar ese espacio productivo, y ya no como la palanca fundamental de la transformación política y social.

Esto plantea ciertos dilemas de estrategia económica: el FMLN ha nucleado su estrategia fundamentalmente en el desarrollo de la producción rural, cuando el país se enfrenta a una crisis estructural de la producción agropecuaria de dimensiones históricas. Al mismo tiempo, carece de una estrategia económica nacional, con una gran debilidad en el desarrollo de alternativas para las áreas

La historia vuelve a poner a los industrializantes ante la disyuntiva de tomar la iniciativa para poner en práctica su modelo.

urbanas, donde se concentran las principales actividades económicas y recursos (el Estado, la industria, el comercio, el capital financiero, los servicios). Esta indefinición impide insertar el proyecto productivo popular en una estrategia global de desarrollo, quedando reducido a un proyecto macroempresarial de perfiles aún bastante indefinidos y centrado en el sector menos dinámico de todos.

Además, no todos los sectores de la "economía popular" están insertos en el proyecto del FMLN: sumadas las tierras de la reforma agraria y las del inventario, tenemos que más de un tercio del suelo ha pasado a manos de cooperativas y de ex combatientes. Por lo tanto, potencialmente nos encontramos ante un actor social nuevo, cuyo perfil requiere aún una clarificación política: mientras que las cooperativas de la reforma agraria siguen teniendo una fuerte influencia demócrata cristiana, el FMLN intenta aplicar un proyecto que supone la inclusión de este sector. Desde el punto de vista institucional, ya ha avanzado esta influencia, pues las organizaciones cooperativas más importantes (CONFRAS y FESACORA-COACES) están fuertemente inspiradas por el FMLN, lo cual supone un significativo avance de la izquierda en el sector.

Pero también la derecha presenta su proyecto a los sectores más pobres: por medio de las instituciones gubernamentales de la reforma agraria (FINATA e ISTA), el gobierno ha apostado por la parcelización de las cooperativas, apoyándose en la aspiración tradicional del campesino a la propiedad individual y en una fuerte campaña propagandística de deslegitimación de los derechos a la propiedad del sistema cooperativo; además, promueve el ahogamiento del sector cooperativo en materia de concesión de créditos y asistencia técnica e infraestructuras.

Por su parte, la AID está potenciando determinadas alternativas para los proyectos de desarrollo impulsados por el FMLN. Apoyándose fundamentalmente en la orden salesiana, está financiando

sustanciosamente a la ciudadela Don Bosco, la Universidad Don Bosco, al Polígono Industrial Don Bosco y también a la Fundación Agape (que tiene el estatuto jurídico de recinto fiscal exportador-maquila), para implantar proyectos "políticamente" controlados en las zonas de influencia de la izquierda (especialmente el norte de Chalatenango y Morazán). Este es un esfuerzo que podemos calificar de "contrainsurgencia económica", que aprovecha los vacíos más significativos del proyecto de la izquierda, especialmente la alternativa industrial-urbana.

Por último, el fracaso del programa de estabilización y ajuste sin coste social —fracaso en términos de desarrollo económico, aunque notable éxito en términos de recomposición de los mecanismos de acumulación de los sectores hegemónicos del capital— se produce en un momento en el cual las fuerzas de la oposición no tienen una alternativa estructurada, particularmente aquellos que impulsan un "proyecto alternativo". A esta ausencia contribuye sin duda la limitada comprensión de los alcances estructurales de las políticas macroeconómicas, cuya discusión suele establecerse en un marco academicista y tecnocrático. Pero creemos que lo apuntado en este artículo será suficiente para entender por qué la lucha política tendrá un fuerte contenido económico-productivo en los próximos años. Y por qué la izquierda, sin las condiciones para lograr que el proyecto popular se vuelva hegemónico, necesita retomar, con perfiles nuevos, el viejo proyecto nacional expresado en la industrialización, del cual fue excluida como actora legítima en 1948 y en las décadas subsiguientes.

Históricamente, los intereses populares han estado subordinados a los planteamientos modernizantes de un sector del capital nacional (1931, 1944, 1948, 1972). La irrupción en el panorama nacional de un proyecto de vocación popular (1979-1980, 1981-1991), vuelve más compleja la disputa por el control del Estado. Este proyecto, que convierte en actores sociales a las clases su-

balternas, aspira a tener voz y voto en la definición del papel y de los objetivos de la política pública.

Por esta razón y por primera vez en la historia de El Salvador, se abre la posibilidad de que el Estado deje de ser un instrumento disputado en exclusiva por las diferentes fracciones del capital, para devenir en generador de consensos y procesador de demandas mucho más diversas y complejas.

3. Las contradicciones inconclusas

En el país se ha abierto un período de transición que servirá para probar si el marco consensuado de expresión y resolución de las contradicciones políticas (las elecciones representativas, el Estado de derecho, la libertad de expresión y de organización política) adquiere vigencia.

Con una oligarquía sin proyecto distinto a la centralización máxima del capital; un sector industrializante que no ha sido capaz de generar un discurso político distinto al de la oligarquía (ARENA) desde la guerra con Honduras (momento en que este sector del capital se subordinó definitivamente al proyecto oligárquico), y un proyecto popular en vías de replantear sus objetivos, prácticas y alianzas, se vuelve una posibilidad real la reconstitución de la alianza progresista tradicional sobre nuevas bases.

Ya no se trata de subordinar a los obreros, a los campesinos y a las capas medias al proyecto del capital modernizante, sino de concertar un proyecto de nación que, excluyendo al modelo oligárquico (por su desconsideración del mercado interno, por la ausencia de dinámica salarial, por ser un Estado monopolizado al servicio de los intereses de una minoría, por la utilización de la Fuerza Armada como mecanismo de dominación política, etc.), se centre en el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales y en la mejora de los niveles de vida de la mayoría de la población.

Este proyecto puede contar con el aval del capital transnacional, en cuanto le da una base de estabilidad política al inversionista extranjero; además de que

un proceso de transformación productiva y social acelerado sólo puede hacerse contando con la participación activa de los agentes externos.

También la Comunidad Económica Europea e incluso Estados Unidos podrían apoyarlo, en la medida en que un proyecto de esta naturaleza necesariamente debe buscar la integración regional, para poder convertirse en un interlocutor de mayor nivel. Y en esa misma medida, concuerda con la lógica actual de regionalización y formación de bloques económicos internacionales.

El carácter democrático de este proyecto crearía las condiciones para facilitar la transformación de los sujetos portadores del modelo oligárquico. Ciertamente, esta transformación es tanto de tipo cultural y político (cultura empresarial moderna, política democrática concertadora, etc.) como de relocalización de los activos productivos y de las actividades de inversión.

Pero esta coyuntura, es también un período para ver si la debilidad organizativa y propositiva de los portadores objetivos y subjetivos del modelo industrializante puede ser remontada. Las contradicciones internas del capital se diversifican; los grupos tradicionales, la oligarquía y la burguesía nacional, se combinan con nuevos agentes —el capital transnacional, el sector de la economía popular— y con nuevos espacios (la integración regional) en un juego de relaciones y oposiciones en cruces múltiples.



3.1. La coyuntura política de la economía

Las características económicas del período condicionan esta apuesta posible: (1) la pérdida de importancia de la agroexportación como eje de la acumulación; (2) el creciente carácter comprador del capital salvadoreño, cuyas actividades más dinámicas —la construcción y el comercio— están basadas en el consumo del ahorro externo (las remesas y la ayuda); (3) el proceso acelerado de centralización e internacionalización del capital que favorece a los grupos oligárquicos (la reprivatización de la banca) y al capital multinacional (quedándose con el mercado interno de las empresas nacionales).

Estos tres elementos permiten concluir que una pérdida de la base productiva tradicional de la oligarquía (la agroexportación) se combina con una recomposición de los espacios de acumulación de ésta (las finanzas y el comercio), en una dinámica económica que no se sostiene en absoluto en el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, sino en el acceso al ahorro externo como base del consumo (el consumo improductivo).

Después de 45 años la historia vuelve a poner a los industrializantes ante la disyuntiva de tomar la iniciativa para poner en práctica su modelo. Solo que ahora debe ser un modelo *concertado*, por una parte, con el sector económico popular (esencialmente las cooperativas y la pequeña y mediana empresa industrial, y también el potencial productivo vinculado al FMLN y a ese más o menos 10 por ciento del sector industrial informal que tiene potencial de acumulación real); por otra parte, la concertación debe incluir también el espacio regional centroamericano, para que éste se convierta en un espacio político y económico integrado, tanto hacia dentro (la formación del mercado interno) como hacia afuera (la competencia internacional).

Sólo desde ese marco de consenso se puede contraponer al modelo oligárquico reconvertido y pactar los términos de la relación económica con el capital transnacional, que implique pasar de entender el país —y la región— como plataforma de producción para la exportación con mano de obra barata, a considerarlo un espacio interesante para

una inversión productiva que contemple también la dinámica del mercado interno.

En la actual coyuntura observamos ciertos signos alentadores para las perspectiva de esta nueva alianza. En la gestión macroeconómica se amplía el margen de maniobra por el agotamiento del modelo neoliberal de los organismos multilaterales. En América Latina, el fracaso del ajuste estructural en términos de desarrollo económico¹², es también el fracaso de la alianza que lo avaló: el capital financiero transnacional, los sectores compradores de las burguesías locales, la tecnocracia y las oligarquías agrarias.

El ajuste estructural se ha basado en un supuesto erróneo, que el Estado en América Latina estaba montado sobre el mercado. La reducción del Estado como objetivo, no logra hacer "aparecer" un mercado que en realidad no existe. Los estados latinoamericanos, con pocas excepciones, no han sido reguladores en el sentido europeo, sino más bien estados sustitutos: muchas actividades que han sido asumidas por el sector público en nuestros países (en El Salvador por ejemplo, los hoteles, los ingenios azucareros, las empresas de fabricación de cemento...) lo han sido no suplantando el rol de unos empresarios inexistentes que hubieran podido llevar a cabo tales actividades productivas, sino precisamente por la ausencia de éstos.

La alternativa al ajuste estructural debe basarse en el convencimiento de que la tarea del desarrollo implica necesariamente el desarrollo del mercado interno. Pero esto no puede hacerse sin una redistribución radical de los activos productivos y de los mecanismos de promoción social (la educación, la salud y el crédito) que conviertan en consumidores dinámicos a las mayorías sociales de nuestros países. Por tanto, el desarrollo del mercado no se puede hacer sin un crecimiento de las actividades reguladoras del Estado y de su presencia en la economía, en áreas estratégicas para la renovación tecnológica y la promoción de nuevos espacios y actividades de acumulación internos (la transformación del agro, la inversión productiva en capital-riesgo, la formación profesional, nuevas ramas productivas, etc.).

Los desequilibrios macroeconómicos, que el ajuste no ha podido controlar salvo con un coste social muy elevado, no se pueden resolver con medidas contables de reducción de gastos y aumento de ingresos, sino con medidas que generen un mayor dinamismo en la actividad productiva, ensanchen la base fiscal y la capacidad de exportación. Las reformas agrarias, la orientación social del crédito, las medidas de fomento y protección sectoriales y selectivas, el desarrollo de la negociación colectiva son la base de los verdaderos reajustes estructurales.

El Salvador se convertiría así en el eje del proyecto de integración centroamericana, pues lo que aquí ocurra, va a condicionar la dinámica del proceso integrador y sus objetivos finales: ¿integración comercial o integración productiva?

3.2. La coyuntura laboral de la economía

Si los empresarios industrializantes tienen la capacidad para vislumbrar el reto de la actual coyuntura, se vuelve necesario concertar también con los sectores populares asalariados, tanto del campo como de la ciudad. ¿Cómo se va a regular la participación de los asalariados en el crecimiento de la producción y del ingreso? ¿Qué mecanismos de promoción social para los asalariados se van a establecer?

Las alianzas se establecen sobre el principio del reconocimiento de la diversidad de intereses, la autonomía y la identidad propia de cada fuerza. En este sentido, una alianza cuyo objetivo sea eliminar el carácter excluyente y exclusivo del modelo dominante, no se puede hacer sin otorgar el carácter de aliado a los trabajadores asalariados, uno de los actores sociales más afectado por el carácter de dicho modelo.

Por eso, la apuesta en favor del solidarismo que asume el empresariado nacional es incongruente con la consideración de los trabajadores como parte de una alianza para el nuevo modelo¹³. Solamente una organización sindical fuerte, autónoma y unitaria puede representar los intereses colectivos de la clase trabajadora, y plasmarlos en un

proyecto de largo plazo, asumiendo compromisos y defendiéndolos contra quienes se puedan oponer a la nueva realidad.

El desarrollo del sindicalismo no es, por lo tanto, un objetivo sectorial, sino una necesidad nacional para que puedan darse varias circunstancias:

- la aplicación del derecho constitucional a la organización de la sociedad civil;
- para regular la economía desde la negociación colectiva por ramas;
- para transformarse en interlocutores del Estado y consensuar políticas públicas, en el desarrollo de tareas conjuntas como, por ejemplo, la reconversión industrial, o el desarrollo cualitativo de la seguridad social, o la formación y calificación de la fuerza de trabajo;
- para compartir costos en coyunturas económicas internacionales desfavorables —y que no recaigan exclusivamente sobre los trabajadores—;
- para adaptar la sociedad al cambio tecnológico —que no es exclusivamente un tarea microeconómica— etc.

El reto que tienen los trabajadores en esta coyuntura es aprender a expresar intereses propios, desde la construcción de una identidad propia, con autonomía (respecto a partidos políticos, empresarios, Estado o agentes externos) con dimensión de solidaridad y dimensión global —nacional e internacional.

Los actuales dirigentes sindicales tienen la tarea de reconvertir las estructuras sindicales dispersas y frágiles, dotándolas de una nueva organicidad (desarrollo de sindicatos por ramas, democracia interna, confederación, etc.) y de un nuevo discurso en el cual se clarifique si se apuesta por un modelo nacional industrializante y si la integración regional forma parte de su proyecto.

Incluso si la respuesta fuese negativa, los trabajadores necesitan equiparse con los requisitos señalados, para convertirse en interlocutores sociales y políticos de otros actores sociales que apuestan a proyectos diferentes.

4. La emergencia de nuevos actores sociales y el ocaso de algunos viejos

La transición que vive El Salvador y lo que se pueda esperar de ella está determinada por los intereses y las relaciones que se establecen entre los principales actores sociales. En nuestro país, identificamos como los más relevantes los siguientes.

Estados Unidos, en su doble dimensión de potencia imperial dominante geopolíticamente sobre nuestro país, y de controladora de las principales instituciones internacionales que actúan sobre y en el país, y que en la coyuntura de los años ochenta aportó el proyecto político dominante, caracterizado por las reformas contrainsurgentes.

Las empresas multinacionales, que adquirieron un papel relevante en la economía de nuestro país durante los años sesenta, como consecuencia de la puesta en marcha del mercado común centroamericano.

La oligarquía, las "catorce familias" y sus combinaciones y derivados: un factor tradicional siempre presente en la modernización y en el atraso del país, combinando su gran capacidad de mutación para beneficiarse de los sucesivos ejes de la acumulación de capital que se han sucedido en nuestra historia y, al mismo tiempo, portadora de una cultura de exclusión de los beneficios de esa acumulación de todos aquellos que no forman parte integrante del sector. Hasta el presente, ha compartido, fundamentalmente, con el capital multinacional —siempre sobre una base limitada— el control del proceso de acumulación económica.

La burguesía nacional, en la cual incluimos a los empresarios industriales y comerciantes que no forman parte de los grupos hegemónicos del capital (la acumulación originaria de capital de estos últimos se encuentra y se mantiene en el agro), se caracteriza principalmente por su interés en acceder al control del Estado y del capital financiero —pero de lo cual ha sido generalmente excluida—, lo cual acrecienta las dificultades para que este sector amplíe su participación en la concentración del capital.

Las capas medias de profesionales y asalariados cualificados, incluyendo también a los peque-

ños comerciantes y a los pequeños propietarios, históricamente subordinados política e ideológicamente a los grupos hegemónicos, pero con importantes momentos de ruptura a lo largo de nuestra historia

Los campesinos (incluyendo a los asalariados agrícolas) fuente de mano de obra sujeta tradicionalmente a condiciones de superexplotación para mantener el excedente agrícola y subsumida al capital para contribuir, con el bajo precio de los bienes de consumo obrero, a mantener bajos los salarios urbanos.

Los asalariados urbanos: obreros, empleados de la empresa privada y trabajadores de la administración pública, base de apoyo de los sucesivos intentos de modernización, pero excluidos como actores directos de los procesos políticos que se generan desde el Estado.

La Fuerza Armada, verdadero Estado (mayor) que frente a un Estado (menor) que nunca cumplió el papel de resolver las contradicciones económicas y sociales por la vía de la transformación, fue utilizada para eliminar dichas contradicciones por medio de la represión. Hoy está planteado, en los acuerdos de paz, un nuevo rol para la Fuerza Armada, el cual implica su salida de escena como actor político nacional, su subordinación al poder civil y la limitación de sus funciones efectivas al rol constitucional de garante de la soberanía nacional.

Las relaciones entre todos estos sujetos colectivos¹⁴ vienen determinadas por la existencia de intereses contrapuestos al lado de objetivos comunes, de perspectivas distintas allí donde los intereses son los mismos.

La viabilidad de un nuevo proyecto de sociedad requiere un consenso sobre las funciones del Estado y los objetivos de la política económica, el reparto de poderes y el funcionamiento de los órganos representativos y democráticos del Estado. La búsqueda de ese consenso (por medio de alianzas, acuerdos, compromisos, etc.) no es un problema de conspiración; por el contrario, debe estar sometido al debate público. Tampoco se trata de que en las elecciones o en la asamblea legislativa se establezcan los principios de la posible alianza

que promueva este proyecto (pues no se trata de caer en el Estado corporativo, donde los órganos del Estado representan no a los ciudadanos, sino a los grupos de interés).

En este sentido, el Foro de Concertación Económica y Social se convierte en un verdadero laboratorio de ensayo del ejercicio de la puesta en común de las diferentes perspectivas sobre el desarrollo nacional. En él se va a comprobar si las fuerzas sociales allí representadas asumen que el límite a su propio desarrollo se encuentra en el viejo modelo oligárquico excluyente en lo político y exclusivo en lo económico. Por ahora comprobamos que los empresarios y el gobierno han asumido este espacio de concertación más como un ámbito de dominación sobre los trabajadores, suponiendo que evitan así la ingobernabilidad que éstos pudieran generar. La parcialidad del gobierno se suma a la subordinación política de los empresarios a ARENA, lo cual dificulta el reconocimiento de los sindicatos como agentes nacionales de desarrollo y como actores confiables y responsables para visualizar vías alternativas a la doctrina neoliberal en bancarota.

Es necesario que los sujetos portadores de los intereses que pueden confluir en este proyecto se expresen con visión propia de la realidad nacional y con organicidad que asegure la capacidad de representación. Solamente en un debate articulado entre los agentes sociales es posible llegar a los consensos de principio que deben guiar en este período de transición la elaboración de las propuestas programáticas de los partidos políticos y convertirse posteriormente, en legalidad democrática.

Los partidos políticos en una sociedad pluralista como la que se está definiendo expresan la diversidad ideológica y de intereses de la sociedad, y articulan el diálogo necesario para que los intereses sectoriales confluyan en un proyecto nacional. Pero esto exige una transformación profunda de los partidos actuales, por la vía de la democratización interna, para ser canales de participación social en los asuntos del Estado.

La desmilitarización, por su parte, es un requisito de la gobernabilidad de una sociedad en cambio. La Fuerza Armada pierde su papel de actor



político y de instrumento de dominación y represión. Y los agentes sociales, en especial los productivos (los empresarios, los trabajadores, los campesinos, los técnicos, los intelectuales, los empleados públicos, etc.) adquieren un perfil de expresión política de los intereses sectoriales de la sociedad. En tal caso, se estarán sentando las bases para el surgimiento de una nueva propuesta de *organización social* que tendría como marco de referencia la propuesta de *organización política* que se deriva de los acuerdos de paz.

Notas

1. "Alcances y límites de la concertación social en El Salvador" en *Estudios Centroamericanos* año XLVII n° 521 pp.213-225, Universidad Centroamericana, San Salvador, marzo 1992.
2. Para profundizar en este período, el lector puede acudir a Jorge Cáceres P., Rafael Guidos Béjar y Rafael Menjívar Larín, *El Salvador: una historia sin lecciones*, FLACSO, San José, 1988.
3. En nuestra opinión, 1979 tiene una connotación diferente, al contar con participación directa de Estados Unidos y por estar aliados los dos intereses hegemónicos (Estados Unidos y la oligarquía) en-

torno a un objetivo común: detener la insurgencia salvadoreña.

4. El lector que desee profundizar en estos cruces entre la oligarquía cafetalera y la manufactura puede leer de David Mena, *Los cafetaleros y la industrialización salvadoreña*, Escuela Centroamericana de Sociología (tesis de grado), San José, 1979.
5. De la misma manera, veinticinco años antes, los asesores del gobierno británico diseñaron la creación del Banco Central de Reserva, inicio de la modernización financiera.
6. Hasta veinte años después, finales de los ochenta, los presidentes de la región retomaron la iniciativa integracionista propiciada por condiciones internacionales que la favorecen.
7. El golpe de Estado de marzo de 1972 evidenció la coincidencia de algunos militares con el proyecto modernizante de la UNO: cuando el coronel Benjamín Mejía se alzó, Napoleón Duarte salió a arengar a las masas para que lo apoyaran.
8. En este período, se perfiló la expresión política de los tres proyectos en pugna: el contrainsurgente (Estados Unidos-Partido Demócrata Cristiano), el oligárquico (ARENA) y el proyecto popular, que se concretara finalmente con la alianza FMLN-FDR.
9. Ver Joaquín Arriola, "El fracaso de los programas de ajuste estructural en América Latina" en *Realidad económico-social*, 1992, 30.
10. Ver de Joaquín Arriola, *Los procesos de trabajo en la Zona Franca de San Bartolo*, IIES-UCA, 1993.
11. Como señalamos anteriormente, en este proceso, los industriales confrontaron el poder de los grupos oligárquicos, disputándoles el uso del excedente económico nacional. Esta confrontación nunca ha sido pública, en el sentido de proponer partidariamente a la población programas de gobierno sobre los cuales debiera pronunciarse. Al contrario, han sido disputas ocultas y gremialistas, apelando al ejército como árbitro, apoyo o garante de posibles acuerdos. Cuando estos últimos no se alcanzaron, recurrieron al golpe y al contragolpe de Estado para dirimir sus conflictos de intereses.
12. El ajuste estructural no ha fracasado ciertamente en su objetivo de trasladar los activos productivos públicos a manos del capital transnacional, y en su objetivo de reducir la influencia de las mayorías populares en la gestión económica del Estado.
13. La retórica del empresariado salvadoreño se vuelve un peligro potencial para la estabilidad democrática, cuando impiden a los sindicatos desarrollar sus actividades, rechazan ampliar la negociación colectiva, para luego criticarlos por no hacer sindicalismo y sí política de agitación. La agitación se puede volver incontrolable cuando no hay mecanismos negociados (legales) para resolver los conflictos.
14. Los marginales, los pobres de los pobres, no tienen, a nuestro juicio, la característica de actor social, por carecer de perfil social (económico, ideológico, cultural y político), no son actores sociopolíticos. Su ser existencial se combina con su no estar real, apuntando a la principal característica del país a lo largo de su historia: la pobreza y la exclusión como formas de vida. La historia sin pueblo de un pueblo sin historia.